



AMPARO EN REVISION NUM. 3014/79.
S.A.

PONENCIA DEL C. MINISTRO RAUL CUEVAS MANTECON.
SECRETARIO: Lic. José Pérez Troncoso.

México, Distrito Federal.- Acuerdo del Tribunal Pleno correspondiente al día veintiocho de septiembre de mil novecientos ochenta y dos.

V I S T O S; Y

MINISTRO PONENTE:

R E S U L T A N D O:

LIC. RAUL CUEVAS MANTECON.

PRIMERO.- Por escrito presentado el seis de enero de mil novecientos setenta y ocho, ante el juez primero de Distrito en el Estado de Michoacán, S.A., por conducto de su re-

presentante legal, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se indican:

Vo. Bo.

"a).- Del H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, el Decreto No. 20 que contiene la Ley de Ingresos Municipales para el año de 1978, publicada el día 31 de diciembre de 1977 en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, por lo que se refiere al artículo 17"

COTEJADO.

"b).- Del C. Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán y del C. Secretario General la promulgación y firma del Decreto mencionado en el punto anterior, así como los diversos actos en que intervino para llegar a la formación de dicho Decreto y su ejecución."

"c).- De los C. Tesoreros Municipales en Zacapu, Michoacán y Morelia, Mich., los actos de ejecución encaminados a exigir el pago de los derechos a que se refiere el artículo 17 del Decreto No. 20 de

DE JUSTICIA
CION

de la Ley de Ingresos Municipales para el año de 1978.

SEGUNDO.- La quejosa narró los siguientes antecedentes de los actos reclamados:

"Que la compañía mi representada, en sus Plantas de , Mich. y , Michoacán, vienen consumiendo energía eléctrica.- En el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, salió publicado el día 31 de diciembre de 1977 el Decreto No. 20, correspondiente a la Ley de Ingresos Municipales para el año de 1978, y en el cual aparece el artículo 17 que textualmente dice: "ARTICULO 17.- Los consumidores de energía eléctrica, con excepción de los que operen bombas de agua potable y negras, molinos de nixtamal y para usos agrícolas, causarán un derecho del 10% sobre su consumo mensual, el que se destinará al pago y mejoramiento del servicio de alumbrado público.- Las empresas suministradoras harán la retención correspondiente, consignando el cargo en los recibos que emitan por el consumo ordinario, informando de las reducciones respectivas.".- Considerando que el Decreto que me refiero en el hecho anterior, por lo que hace al citado artículo 17, violan en perjuicio de mi representada garantías individuales, me veo en la necesidad de promover en su nombre el presente Juicio Constitucional dentro del término de treinta días hábiles previsto en el artículo 22 de la Ley de Amparo, y atento a los siguientes conceptos de violación."

TERCERO.- La quejosa invocó como garantías individuales violadas las que consagran los artículos-





14 y 16 constitucionales, así como también estimó infringidos los artículos 31, fracción IV, y 73, fracciones X y XXIX, de la Carta Magna, y adujo los siguientes conceptos de violación:

"Violación a las garantías que consagran los artículos 10., 14, 16, 31 fracción IV Constitucionales, por violación al artículo 73 fracciones X y XXIX de la Constitución, así como al artículo IV de la Ley del Impuesto Sobre Producción e Introducción de Energía Eléctrica."

"La violación consiste en que no obstante que la fracción X y la XXIX del artículo 73 de la Constitución Federal establece como facultades exclusivas del Congreso de la Unión, para legislar en toda la República entre otras cosas en la energía eléctrica, y para establecer contribuciones igualmente en energía eléctrica, el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo ha decretado en la Ley de Ingresos que salió publicada el día 31 de diciembre de 1977, para entrar en vigor en enero de 1978, en la que en su artículo 17 establece la obligación a los consumidores de energía eléctrica como es mi representada, el pagar un derecho del 10% sobre el consumo mensual de energía eléctrica, careciendo de facultades para ello, ya que como se ha dicho tratándose de energía eléctrica solamente tiene facultades para legislar en relación con ella el Congreso de la Unión, y de manera alguna el Congreso Estatal como lo es el del Estado de Michoacán de Ocampo; consecuentemente es clara la inconstitucionalidad del artículo 17 que se impugna a -

DE JUSTICIA
CION

a través de este juicio por ser violatorio el mismo, de las facultades que en forma exclusiva y expresa - se le ha otorgado al Congreso de la Unión; por otra- parte, el artículo 16 de la Ley del Impuesto Sobre - Producción e Introducción de Energía Eléctrica esta- blece que: "Los Estados, Territorios, Distrito Fede- ral y Municipios, no podrán decretar impuestos, con- tribuciones o gravámenes, cualquiera que sea su ori- gen o denominación sobre: I.- Producción, introduc- ción, transmisión, distribución o consumo de energía- eléctrica" .--

"Como consecuencia del contenido de dicha disposición, el artículo 17 que se impugna de inconsti- tucional viola igualmente la citada disposición, to- do lo cual nos lleva a la conclusión determinante de que el mencionado artículo, es violatorio de las nor- mas constitucionales a que se ha hecho mención al -- principio de este concepto de violación, así como la legislación federal que se comenta, por lo que trae - como consecuencia la violación de los artículos 10., 14 y 16, así como de la fracción IV del artículo 31, todos de la Constitución Política de los Estados -- Unidos Mexicanos, haciendo resaltar que la obligación de cubrir contribuciones como la que se establece en el artículo 17 a estudio, deben de estar fundadas en ley, y si la única ley que puede regir en materia de energía eléctrica es la proveniente del Congreso de - la Unión, es concluyente el que la disposición que - se impugna al haber sido decretada por un Congreso- Estatal, resulta inconstitucional, por lo que procede

ESTADO DE GUERRERO
SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIPR



y así se solicita que se le conceda a mi representada el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión."

"Violación a los artículos 10., 14, 16 y 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La violación consiste en que, suponiendo sin conceder de manera alguna, el que el Congreso Local tuviera facultades para establecer contribuciones como las señaladas en el artículo 17 de la Ley de Ingresos Municipales para el año de 1978, ésta resultaría inconstitucional por cuanto a que no respeta la garantía contenida en la fracción IV del artículo 31 Constitucional, respecto a la obligación de contribuir a los gastos públicos de una manera equitativa y proporcional, puesto que exceptúa del pago del 10% del sueldo derecho por servicios de alumbrado público a aquellos que operen bombas de agua potable y negras, molinos para nixtamal y usos agrícolas, dando con ello un trato diferencial a estos sujetos, en relación con aquellos como mi representada que no cae dentro de la citada excepción, sin que exista ni se dé razón, motivo o fundamentación alguna que justifique ese tratamiento, o lo que demuestra claramente que no se cumple con el precepto constitucional antes mencionado, ya que es notoria la falta de igualdad, de generalidad de uniformidad y de equidad, por lo que procede y así se solicita se conceda a mi representada el Amparo, por violación además de la fracción IV comentada, a los artículos 10., 14 y 16 Constitucionales."



E DE JUSTICIA
ACION
122

"Violación a los artículos 10., 14, 16 y 31 --
fracción IV de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos."

"La violación consiste en que el artículo 17--
que se comenta, establece que se causará un derecho-
del 10% sobre el consumo mensual de energía eléctri-
ca, el que se destinará al pago y mejoramiento al ---
servicio de alumbrado público, puesto que si se tra-
ta del pago de un derecho, éste tiene que cubrirse --
como una contraprestación por el servicio recibido,--
situación esta que en el caso a estudio no se da, --
pues expresamente se dice que este pago del 10% por-
concepto de derechos será para el mejoramiento del -
servicio de alumbrado público, o sea que no tiene na-
da que ver con el pago del pago de un servicio como-
sería el del suministro de la energía eléctrica, má-
xime que en el caso a estudio el Municipio no da tal
servicio, de tal manera que nos encontramos frente -
a una disposición que viola la fracción IV del ar----
tículo 31 constitucional, puesto que no existe obli-
gación para el pago de la misma por concepto de dere-
chos, ya que como se ha dicho no se recibe ninguna -
prestación por el pago de la misma, teniendo presen-
te tanto lo establecido por la doctrina como por las
leyes impositivas, el que son derechos las contrapres-
taciones establecidas por el poder público, conforme
a la ley en pago de un servicio."

De lo anterior cabe concluir, que la disposi-
ción contenida en el artículo 17 de la Ley de Ingre-



Los Municipales para el Estado de Michoacán es inconstitucional, y por ello procede se conceda a mi representada el Amparo solicitado, ya que además de la disposición constitucional antes citada, se violan también los artículos 10., 14 y 16 de la Constitución."

CUARTO.- El juez de Distrito admitió la demanda registrándola con el número II- '78 y, previos los trámites legales respectivos, dictó sentencia que concluyó con el siguiente punto resolutivo:

"UNICO.- SE SOBRESEE el presente juicio de garantías."

Las consideraciones en que se apoyó el juzgador para resolver en el sentido en que lo hizo son las siguientes:

"PRIMERO.- En sus informes con justificación, los CC. Tesorero Municipal de esta ciudad y Tesorero Municipal de Zacapu, Michoacán, negaron los actos que se les atribuyen, y como la quejosa no aportó prueba en contrario para desvirtuar esa negativa, debe sobreseer el juicio por lo que ve a tales actos, con apoyo en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo."

SEGUNDO.- De los informes con justificación rendidos por el H. Congreso del Estado y por los CC. Gobernador Constitucional del Estado y Secretario General de Gobierno, los tres residentes en esta ciudad, aparece que son ciertos los actos reclamados; sin embargo, respecto de tales actos no habrá de entrarse al estudio del fondo del asunto, pues el presente juicio resulta improcedente, y la H. Supre-



DE JUSTICIA
NACIONAL
CO

ma Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número 109, que aparece publicada en la página 196, Octava Parte, de la Compilación de 1975, bajo el rubro "IMPROCEDENCIA", ha sostenido que la - procedencia del juicio de garantías, por ser una - - cuestión de orden público, debe examinarse previamente, la aleguen o no las partes."

"En efecto: según se dejó asentado en el - resultando primero de esta resolución, la aquí quejo sa reclama del H. Congreso del Estado de Michoacán, - el Decreto número 20 que contiene la Ley de Ingresos Municipales para el año de 1978, publicada en el Periódico Oficial del Estado de fecha 31 treinta y uno de diciembre de 1977 mil novecientos setenta y siete, por lo que se refiere al artículo 17, y, de los CC.- Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán y Secretario General de Gobierno, reclama la promulgación y firma de dicho Decreto, así como la intervención que tuvieron para llegar a la formación y a la ejecución del mismo; en la inteligencia de que el citado artículo 17 que se impugna, dispone lo siguiente: "Artículo 17.- Los consumidores de energía eléctrica, con excepción de los que operen bombas de - - agua potable y negras, molinos para nixtamal y para usos agrícolas, causarán un derecho del 10% sobre su consumo mensual, el que se destinará al pago y mejoramiento del servicio de alumbrado público. Las Empresas suministradoras harán la retención correspondiente, consignando el cargo en los recibos que expi



dan por el consumo ordinario, informando de las recaudaciones respectivas."

"Y aunque tales actos son ciertos, según ya se apuntó, cabe decir que en la especie operan las causas de improcedencia que prevé el artículo 73, fracciones XI y XII, de la Ley de Amparo: en primer lugar, porque según aparece del documento que en copia fotográfica remitió directamente a este Juzgado el ~~Gerente~~ General Divisional de la Comisión Federal de Electricidad en esta ciudad,

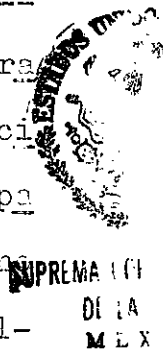
S. A., con fecha 26 veintiséis de enero del año en curso, pagó en forma lisa y llana la cantidad de \$

cuarenta y seis centavos, por concepto de Derecho del 10% diez por ciento sobre su consumo mensual de energía eléctrica, para el pago y mejoramiento del servicio de alumbrado público establecido tal Derecho en el artículo 17 de la Ley de Ingresos Municipales para el año de 1978, y esa actitud, indiscutiblemente, constituye una manifestación de voluntad que entraña el consentimiento de la carga fiscal y el sometimiento voluntario a la ley que la establece, operando así la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, de conformidad con el criterio de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno, sustentado al resolver el amparo en revisión /74, promovido por

y otro, según ejecutorias que aparecen publicadas en las páginas 308 y 309, Primera Parte, del in



forme de labores correspondiente al año de 1977, bajo los rubros "PAGO DE IMPUESTO BAJO PROTESTA, EFECTUADO POR CONDUCTO DE LA SUMINISTRADORA DE SERVICIOS Y NO AUSE LA AUTORIDAD FISCAL" y "PAGO LISO Y LLANO", y de conformidad también con el criterio que el propio Tribunal en Pleno sustentó en la tesis de jurisprudencia número 84, que aparece publicada en la página 193, Primera Parte, de la Compilación de 1917-1975, bajo el rubro "PAGO BAJO PROTESTA, EFECTOS DEL, EN RELACION CON LA OPORTUNIDAD PARA LA PROMOCION DEL JUICIO DE AMPARO". Y se estima que la quejosa consintió la carga fiscal reclamada y la ley -- que la establece, porque, al hacer el pago de dicha carga fiscal ante la empresa suministradora, lo hizo en forma lisa y llana y no "bajo protesta", y ya efectuado ese pago, fue con fecha 6 seis de febrero siguiente presentó su demanda ante este Juzgado, impugnando la tantas veces citada carga fiscal, es decir, cuando ya se había sometido voluntariamente, a través del pago hecho en forma lisa y llana, a la ley que la establece; y en segundo lugar, porque el Derecho del 10% diez por ciento sobre el consumo mensual de energía eléctrica, para el pago y mejoramiento del servicio de alumbrado público, establecido en el artículo 17 de la Ley de Ingresos Municipales para el año de 1978, no nació con esa Ley, sino que regía desde el año anterior a consecuencia del Decreto número 152, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 29 veintinueve de septiem-





1977 mil novecientos setenta y siete, que reformó el artículo 17 de la Ley de Ingresos Municipales para el año de 1977 mil novecientos setenta y siete, creando el citado Derecho tal como ahora se recoge en la vigente Ley de Ingresos Municipales; y así, habiendo sido creado el Derecho del 10% diez por ciento sobre el consumo mensual de energía eléctrica, a través del mencionado Decreto número 152, debe estimarse en vigor desde la promulgación de tal Decreto, en forma ininterrumpida, hasta que sea derogado, porque aun cuando las leyes de ingresos deben ser aprobadas anualmente, esto no significa que las contribuciones establecidas en ellas tengan vigencia, - anual, sino que la tienen en forma ininterrumpida hasta que son derogadas, según ya se apuntó; de manera que la quejosa no debió limitarse a impugnar el Decreto número 20, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 31 treinta y uno de diciembre de 1977, que no hizo más - que reproducir, a través del artículo 17 de la Ley de Ingresos Municipales para el año de 1978, el Derecho del 10% diez por ciento sobre el consumo mensual de energía eléctrica que había sido creado con anterioridad a consecuencia del Decreto número 152, que reformó el artículo 17 de la Ley de Ingresos Municipales de 1977, sino que debió reconocer también esta última Ley, que fue la que introdujo o creó dicha carga fiscal, y como no lo hizo - así, el Decreto número 20, que ahora reclama, debe - - - reputarse derivado del diverso Decreto número 152 que - - consintió, y, por lo mismo, se surte la causal de improcedencia que prevé el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, de conformidad con el criterio de la M. -



DE JUSTICIA
ON

Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentado en la tesis de jurisprudencia número 74, que aparece publicada en las páginas 180 y 181, Primera Parte, de la Compilación 1917 a 1975, bajo el rubro "LEYES DE INGRESOS"; en la ejecutoria que aparece publicada en las páginas 61, 62 y 63, Tercera Parte (Sala Auxiliar), del informe de labores correspondiente al año de 1974, bajo el rubro "LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO QUE CONTRA ELLA SE ENDEREZA, POR CONTENER EN RENGLON IMPOSITIVO QUE ES MATERIA DE UNA LEY FISCAL DE CARACTER ESPECIAL QUE YA REGULA CON ANTERIORIDAD A AQUELLA, MAXIME CUANDO EL TRIBUTO FUE CONSENTIDO EXPRESAMENTE", y en la tesis de jurisprudencia número 15, que aparece publicada en la página 29, Octava Parte, de la Compilación de 1975, bajo rubro "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS".

"Así entonces, siendo improcedente el juicio por lo que ve a los actos de las autoridades mencionadas en este considerando, también respecto de dichos actos debe sobreseerse el mismo, con apoyo en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo."

QUINTO.- Inconforme con la sentencia la quejosa interpuso el recurso de revisión ante el juez que conoció del asunto, quien envió el escrito de revisión al Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito. Dicho Tribunal por resolución de fecha ocho de febrero de mil novecientos setenta y nueve, declaró su incompetencia para conocer del citado recurso y remitió los autos a esta Suprema Corte, la que, por conducto de su presidente admitió el recurso de revisión el --



76

veintitrés de octubre de mil novecientos setenta y nueve,

El agente del Ministerio Público federal se abstuvo de formular pedimento por estimar que el asunto carece de interés público.

En diverso acuerdo de Presidencia fechado el once de enero de mil novecientos ochenta, -- notificado por lista de acuerdos el día treinta -- del mismo mes y año, se ordenó turnar los autos -- al Ministro Ponente.

El término para que opere la caducidad -- de la instancia fue interrumpido por diversas pro -- mociones de la recurrente presentadas en fechas -- veintiuno de agosto y veintidós de octubre de mil -- novecientos ochenta, dieciocho de febrero, prime -- ro de julio y veinticuatro de agosto de mil nove -- cientos ochenta y uno y tres de marzo de mil nove -- cientos ochenta y dos.

CONSIDERANDO:

Primeramente -- Este Tribunal funcionando en -- Pleno, es competente para conocer del presente re -- curso de revisión, de conformidad por lo dispues -- to por los artículos 84 fracción I, inciso b) de -- la Ley de Amparo y 11 fracción IV bis, inciso b) -- de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Fede -- ración, en tanto se interpuso en contra de senten -- cia dictada por un juez de Distrito en la audien -- cia constitucional de un juicio de garantías en -- el que se reclamó la inconstitucionalidad de la -- Ley de Ingresos Municipales del Estado de Michoac --



SECRETARÍA DE JUSTICIA
FEDERAL
MEXICO

cán para el año de mil novecientos setenta y ocho, por estimarse invasora de la esfera de atribuciones de la autoridad federal.

SEGUNDO.- Los agravios hechos valer por la recurrente se hicieron consistir:

"Violación a los artículos 76, 77, 78 y 155 de la Ley de Amparo en relación con los artículos 73 - fracción XI y 74 fracción III de la misma ley y con los artículos 12, 14, 16 y 31 fracción IV y 73 fracciones X y XXIX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"La violación consiste en que el juez de Distrito en el Estado de Michoacán, en el Considerando Segundo de su sentencia dice:

"Y aunque tales actos son ciertos, según ya se apuntó, cabe decir que en la especie operan las causales de improcedencia que prevé el artículo 73, fracción XI y XII, de la Ley de Amparo: en primer lugar, -- porque según aparece del documento que en copia fotostática remitió directamente a este Juzgado el Gerente General Divisional de la Comisión Federal de Electricidad en esta ciudad,

S.A., con fecha 26 veintiséis de enero del año en curso, pagó en forma lisa y llana la cantidad de \$

por concepto de Derecho del 10% diez por ciento sobre su consumo mensual de energía eléctrica, para el pago y mejoramiento del servicio de alumbrado público, establecido tal derecho en el artículo 17 de la Ley de In-

SUPREMA C
DE LA
MEX



gresos Municipales para el año de 1978, y esa actitud, indiscutiblemente, constituye una manifestación de voluntad que entraña el consentimiento de la carga fiscal y el sometimiento voluntario a la ley que la establece, operando así la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, de conformidad con el criterio de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno, sustentado al resolver el amparo de revisión 74, promovido por y otro, según ejecutorias que aparecen publicadas en las páginas 308 y 309, Primera Parte, del informe de labores correspondiente al año de 1977, bajo los rubros "PAGO DE IMPUESTO BAJO PROTESTA, EFECTUADO POR CONDUCTO DE LA SUMINISTRADORA DE SERVICIOS Y NO ANTE LA AUTORIDAD FISCAL" Y "PAGO LISO Y LLANO", y de conformidad también con el criterio que el propio Tribunal en Pleno sustentó en la tesis de jurisprudencia número 84, que aparece publicada en la página 193, Primera Parte, de la Compilación de 1917 a 1975, bajo el rubro "PAGO BAJO PROTESTA, EFECTOS DEL, EN RELACION CON LA OPORTUNIDAD PARA LA PROMOCION DEL JUICIO DE AMPARO" y se estima que la quejosa consintió la carga fiscal reclamada y la ley que la establece, porque, al hacer el pago de dicha carga fiscal ante la empresa suministradora, lo hizo en forma lisa y llana y no "bajo protesta", y ya efectuado ese pago, fue que don fecha 6 seis de febrero siguiente presentó su demanda ante este Juzgado, impugnando la tantas veces citada carga fiscal, es decir, cuando ya se había

sometido voluntariamente, a través del pago hecho en forma lisa y llana, a la ley que la establece".

"Tales consideraciones son totalmente ilegales, porque el pago a que se refiere la resolución por la suma de \$ efectuado en el mes de enero del presente año, por concepto de derecho del 10% sobre consumo mensual de energía eléctrica para el pago y mejoramiento del servicio de alumbrado público, no se hizo como indebidamente lo sostiene el juez, con base en el artículo 17 de la Ley de Ingresos Municipales para el año de 1978, puesto que el pago está en relación con el suministro de energía eléctrica correspondiente al mes de diciembre de 1977, período este en que no puede ser aplicado retroactivamente el mencionado artículo 17, por lo que cabe concluir que dicho pago no se hizo con base en la ley, que en forma por demás arbitraria, lo considera el Juez de Distrito."

"Cabe hacer resaltar que en el documento, que además no es sino una simple fotocopia, no aparece en parte alguna el que el pago sea sobre el consumo correspondiente al mes de enero, lo que lógicamente, no puede ser, puesto que para el día 26 de enero no había transcurrido el mes a que se refiere el artículo 17 antes mencionado y mucho menos el día 17 de enero en que según la fotocopia que se analiza, se requirió de pago, siendo además indiscutible, el que esta clase de pagos se tienen que hacer una vez que haya transcurrido el período a que los mismo se refieren, en el caso concreto, al de un mes; por lo tanto, no podía ser sino hasta el mes de febrero del presente año, cuando mi representada podía efectuar el primer pago correspon-



diente al mes de enero, por el consumo de energía eléctrica y de los supuestos derechos, este último acuerdo con el artículo 17 de la Ley de Ingresos Municipales - para el año de 1978."

Todo lo anterior nos lleva a la conclusión de que el juez por una parte, a una simple fotostática -- le esta dando un valor como si fuera un documento original y como si hubiera sido exhibido como prueba por parte de la autoridad, o sea por el Secretario General de Gobierno del Estado de Michoacán, lo que no aconteció, por lo que no debería haberse tenido como tal; -- independientemente de que con dicha fotostática, no se demuestra que el pago del 10% se hubiera hecho con -- base en el artículo 17 de la Ley de Ingresos Municipales para el año de 1978 que se combate, por lo que -- es claro que hubo, por parte del juez, una indebida valoración de ella, violando los artículos 197 y demás -- relativos del Código Federal de Procedimientos Civiles."

"Por lo tanto, es clara la violación de -- los artículos 12., 14 y 16 Constitucionales por inexacta aplicación de la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo y por no haberse avocado el estudio del fondo del negocio, concediendo el amparo solicitado -- por violación a las garantías consagradas en los -- artículos constitucionales citados, así como la fracción IV del Artículo 31 Constitucional y 73 fracción -- X y XXIX de la misma, consecuentemente resulta ilegalmente, la aplicación de la fracción III del -- artículo 74 de la Ley de Amparo, en virtud de que --



RTE DE JUSTICIA
NACIONAL
MEXICO

no existe ninguna causal de improcedencia para haber --
sobreseído el Juicio de Garantías."

"Violación a los artículos 76, 77, 78 y --
155 de la Ley de Amparo en relación con los artículos--
73 fracción XII y 74 fracción III de la misma ley y --
con los artículos 1º., 14, 16 y 31, fracción IV y 73 -
fracciones X y XXIX de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. La violación consiste en que
el juez de Distrito en el Estado de Michoacán, en el --
Considerando Segundo de su sentencia dice:

"Y en segundo lugar, porque el Derecho del
10% diez por ciento sobre el consumo mensual de ener--
gía eléctrica, para el pago y mejoramiento del servi--
cio de alumbrado público, establecido en el artículo--
17 de la Ley de Ingresos Municipales para el año de -
1978, no nació con esa Ley, sino que regía desde el -
año anterior a consecuencia del Decreto número 152, -
publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha
29 veintinueve de septiembre de 1977 mil novecientos se --
tenta y siete, creando el citado Derecho tal y como aho--
ra se recoge en la vigente Ley de Ingresos Municipa--
les; y así, habiendo sido creado el Derecho del 10% --
diez por ciento sobre el consumo mensual de energía --
eléctrica, a través del mencionado Decreto número --
152, debe estimarse en vigor desde la promulgación de --
tal Decreto, en forma ininterrumpida, hasta que sea --
derogado, porque aun cuando las leyes de ingresos de--
ben ser aprobadas anualmente, esto no significa que --
las contribuciones establecidas en ellas tengan vigen



79

cia anual, si no que la tienen en forma ininterrumpida hasta que son derogadas, según ya se apuntó; de manera que la quejosa no debió limitarse a impugnar el Decreto número 20, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 31 treinta y uno de diciembre de 1977, que no hizo mas que reproducir, a través del artículo 17 de la Ley de Ingresos Municipales para el año de 1978, el Derecho del 10% diez por ciento sobre el consumo mensual de energía eléctrica que había sido creado con anterioridad a consecuencia del Decreto número 152, reformó el artículo 17 de la Ley de Ingresos Municipales de 1977, sino que debió reclamar también esta última ley, que fue la que introdujo o creó dicha carga fiscal, y como no lo hizo así, el Decreto número 20, que ahora reclama, debe reputarse derivado del diverso Decreto número 152 que consintió, y, por lo mismo, se surto la causal de improcedencia que prevé el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, de conformidad con el criterio de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentado en la tesis de jurisprudencia número 74, que aparece publicada en las páginas 180 y 181, Primera Parte, de la Compilación de 1917 a 1975, bajo el rubro "LEYES DE INGRESOS"; en la ejecutoria que aparece publicada en las páginas 61, 62 y 63, Tercera Parte (Sala Auxiliar) del informe de labores correspondiente al año de 1974, bajo el rubro "LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO QUE CONTRA ELLA SE ENDEREZA, POR CONTENER UN RENGLON IMPOSITIVO QUE ES MATERIA DE UNA LEY FISCAL DE CARACTER ESPECIAL QUE YA REGIA CON ANTE-



DE JUSTICIA
FON

RIDAD A AQUELLA MAXIME CUANDO EL TRIBUTO FUE CONSENTIDO EXPRESAMENTE", y en la tesis de jurisprudencia número 15, que aparece publicada en la página 29, Octava Parte de la compilación de 1917 a 1975, bajo el rubro "ACTOS - DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS". Así entonces, siendo improcedente el juicio por lo que ve a los actos de las autoridades mencionadas en este considerando, también respecto de dichos actos debe sobreseerse el mismo, con apoyo en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo."

"Estas consideraciones, al igual que las que se analizan en el agravio anterior, son totalmente ilegales; en efecto es inexacto e inconcebible en un juez de Distrito el que considere que el artículo 17 de la Ley de Ingresos Municipales para el año de 1978, no nació con esa ley, sino que regía desde el año anterior a consecuencia del decreto 29 de septiembre de 1977 que reformó el artículo 17 de la Ley de Ingresos Municipales para el año de 1977, por lo que debe estimarse que tienen una vigencia ininterrumpida hasta que son derogados, por lo que la quejosa debía haberse limitado a impugnar el mencionado decreto de 1977 y no como lo hizo, ya que el nuevo decreto debe de reputarse derivado del diverso decreto de 1977, soportando la causal de improcedencia que prevé el artículo 73 fracción XII de la Ley de Amparo. En efecto, es incuestionable y aceptado por el propio juez que como se dijo en la demanda con fecha 31 de diciembre de 1977, en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán, salió publicada la Ley de Ingresos Municipales para el año de 1978 y en



la que en su artículo 17, expresamente se refiere a --
 los consumidores de energía eléctrica causarán un derecho
 del 10% sobre su consumo mensual; por otra parte --
 su artículo Primero Transitorio establece que esta Ley
 surtirá sus efectos a partir de 1º de enero de 1978;--
 consécuentemente se estaba frente a una nueva Ley de --
 Ingresos, que no tiene nada que ver con la anterior, --
 pues las mismas tienen vigencia por períodos que terminan
 el día último de cada año, no teniendo la vigencia
 ininterrumpidamente hasta que sean derogadas, como ilo
 galmente lo dice el juez, pues de ser así, saldría sobr
 brando el que año con año se promulgara la Ley de Ing
 resos Municipales. Consecuencia de lo expuesto, es el
 que queda plenamente demostrada la antijurídica sentencia
 dictada por el Juez Primero de Distrito en el Estado
 de Michoacán y la clara indebida aplicación de la
 fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, sinque
 tenga aplicación la tesis que invoca, porque la --
 misma se refiere a aquellos casos en que existe una ley
 fiscal de carácter especial, como puede ser la Ley del
 Impuesto Sobre la Renta, pero no tratándose única y exclusi
 vamente de la Ley de Ingresos, como es el caso aes
 tudio, puesto que no existe ninguna ley especial que
 estableciera los supuestos derechos del 10%, sino quesolamente
 aparece en la Ley de Ingresos Municipales --
 por lo que es claramente inoperante el sobreseimientohecho
 por el juez. Consecuentemente resulta ilegal --
 igualmente, la aplicación de la fracción III del artículo
 74 de la Ley de Amparo, en virtud de que no existe
 ninguna causal de improcedencia para haber sobreseído
 el Juicio de Garantías, como indebidamente lo hizo--



el juez."

TERCERO.- Debe quedar firme el sobreseimiento dictado en el juicio, respecto de los actos de ejecución genérica de la ley reclamada como autoaplicativa, que se atribuyen a los tesoreros municipales de las -- ciudades de y del Estado de Michoacán, -- por no haber combatido la recurrente dicho sobreseimiento.

CUARTO.- Los agravios antes transcritos son -- fundados y suficientes para revocar la sentencia que se revisa.

Es fundado el agravio que se endereza en contra de las consideraciones sostenidas en primer lugar por el juez de Distrito, para estimar surtida la causa de improcedencia prevista por la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo y sobreseer en el juicio.

En efecto, el juzgador no estuvo en lo correcto al darle valor de prueba plena a una copia fotostática simple y considerar, con base en ella, que la quejosa consintió la Ley de Ingresos Municipales que reclama -- por haber pagado el tributo que establece dicha ley. -- La copia fotostática simple que obra a fojas 62 del -- expediente de amparo, enviada al juez de Distrito por el gerente de la Comisión Federal de Electricidad (como mero comprobante de que había cumplido con el requerimiento que le hizo el referido juez de proporcionar -- diversos datos a una de las autoridades señaladas como responsables, fojas 51 y 60), carece, por su propia naturaleza, del valor probatorio que indebidamente le -- otorgó el resolutor, puesto que sólo podría hacer pro-



sumir la existencia del documento que reproduce, pero de ninguna manera puede acreditar el hecho del pago del gravamen, ante la ausencia de otros datos de prueba que le den validez legal de indicio.

Sirve de apoyo a las consideraciones expuestas, el criterio sustentado por este Tribunal Pleno, en las tesis números 8 y 9, publicadas en las páginas 568 y 569, respectivamente, de la Primera Parte, del último Informe rendido por el Presidente de esta Suprema Corte, que expresan:

"COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples que da el prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto, este Tribunal en Pleno, en ejercicio de dicho arbitrio, considera que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen, por sí mismas, de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen, pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran ad miniculadas con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho o derecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación de sustenta en la circunstancia de que las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corres



ponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permitiera reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer."

"COPIAS FOTOSTATICAS. VALOR PROBATORIO DE LAS.- De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 129, 133 y 136 del Código Federal de Procedimientos Civiles, las copias fotostáticas no pueden considerarse documentos privados, quedando en cambio comprendidas dentro de los medios de prueba a que se refiere el artículo 93, fracción VII, del aludido código. En consecuencia, para determinar su valor probatorio debe aplicarse el numeral 217 del mismo ordenamiento legal, y no los artículos 205 a 210 que se refieren a la apreciación de los documentos privados, pues de acuerdo con el primero de dichos dispositivos, las copias fotostáticas carecen de valor probatorio pleno si no se encuentran debidamente certificadas, por lo que su valor probatorio es el de un simple indicio, con independencia de que no hayan sido objetadas."

Con independencia de lo anterior, no pasa inadvertido a este Tribunal Pleno que la quejosa no pudo haber pagado durante la vigencia de la Ley que reclama, el derecho del diez por ciento sobre su consumo anual de energía eléctrica. En efecto, en la fecha que apreció el juez de Distrito que se pagó dicho tributo (26 de enero de 1978), aún no se daba el supuesto que establece el artículo 17 de la reclamada ley; es decir no era lógicamente posible que, en la indicada fecha (cuando todavía no concluía el citado mes de enero), es.



tuviera determinada la cantidad que en numerario debía pagar la quejosa por el suministro de energía eléctrica y por consiguiente, la cuantificación del monto del tributo.

Igualmente, es fundado el agravio en el que se combaten las argumentaciones hechas valer en segundo lugar por el juez de Distrito, para considerar surtida la causa de improcedencia contenida en la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo.

En dicho agravio se aduce, que es indebido que el juzgador estimara que por no reclamarse la Ley de Ingresos Municipales del Estado de Michoacán para el año de mil novecientos setenta y siete que creó el derecho del diez por ciento sobre el consumo de energía eléctrica, deba tenerse por consentida la Ley de Ingresos Municipales del siguiente año que se reclama, por reproducirse en ésta última dicho tributo puesto que se trata de ordenamientos legales distintos.

Es exacto lo alegado por la recurrente. Aun cuando la quejosa se hubiera sometido a las disposiciones que contemplaba la ley anterior y que tales disposiciones se desojan en la nueva ley reclamada, ello de ninguna manera puede implicar como incorrectamente lo estimó el juez, que la nueva ley resulte derivada de aquella que fue consentida, ya que, desde el punto de vista formal y material, son actos legislativos distintos. Respecto de problemas similares, este Tribunal Pleno ha sustentado el mismo criterio, al resolver los amparos en revisión siguientes:

A.R. /69, promovido por



DE JUSTICIA
ACION
CO

S.A., y sus acumulados, fallado el quince de febrero de mil novecientos setenta y dos, por unanimidad de dieciséis votos de los señores Ministros: Guerrero - López, Del Río, Rebolledo, Jiménez Castro, Burguete, Sarracho Alvarez, Martínez Ulloa, Iñárritu, Solís López -- Salmorán de Tamayo, Yáñez, Ramírez Vásquez, Guerrero -- Martínez, Mondragón Guerra, Aguilar Alvarez y Presidente Guzmán Neyra.

A.R. 1/77, promovido por S. de R.L., fallado el siete de agosto de mil novecientos setenta y nueve, por unanimidad de dieciocho votos de los señores Ministros López Aparicio, Franco Rodríguez, Castellanos Tena, Langle Martínez, Abitia Arzapalo, Lozano Ramírez, Pavón Vasconcelos, Rebolledo, Iñárritu, - Palacios Vargas, Serrano Robles, González Martínez, Salmorán de Tamayo, Sánchez Vargas, Del Río, Calleja García, León Orantes y Presidente Téllez Cruces.

Las consideraciones sustentadas al respecto en los referido **amparos** en revisión, fueron del tenor literal siguiente:

" En efecto, aun en el supuesto de que el Código "Fiscal sometiera a las quejosas en sus preceptos relativos a iguales situaciones que las que hubieran consentido bajo la Ley del Impuesto sobre Ingresos Personales abrogada, la circunstancia de que tales preceptos formen parte de un nuevo ordenamiento legal, hace indispensable que los órganos del Estado que lo formaron sean llamados a juicio y oídos, no pudiendo aceptarse el argumento de que por contemplar situaciones jurídicas semejantes a las de una ley anterior que se dice --



que consentida, la nueva ley también lo sea, ya que se trata, desde el punto de vista formal y material, de un acto legislativo distinto al que se dice fue consentido y es aplicada una ley diversa a la que también se dice consentida."

Criterio que también fue reiterado en el amparo en revisión número /76, promovido por --, S.A. de C.V. -- Fallado el 15 de enero de 1980 por -- unanimidad de 17 votos de los señores Ministros López Aparicio, Franco Rodríguez, Cuevas Mantecón, Castellanos Tena, Rivera Silva, Abitia Arzapalo, Lozano Ramírez, Pavón Vasconcelos, Rebolledo Fernández, Iñárritu, Palacios Vargas, Serrano Robles, Salmerán de Tamayo, -- Sánchez Vargas, Calleja García, León Orantes y Presidente Téllez Cruces. Ponente Ministro Langle Martínez.

Por ser de particular importancia se transcriben además, las consideraciones sustentadas en dicha ejecutoria: "Si se tiene en cuenta que cada ordenamiento legal que expide el Poder Legislativo constituye la expresión de su voluntad imperante en el momento en que ejerce la facultad legislativa con que está investido, así como, que, por esa razón, dicha voluntad sólo tiene aplicación a partir del momento en que entra en vigor la ley que la contiene; de manera que aun cuando se regule en la nueva ley, de igual modo que en el pasado, la conducta de las personas y las someta a similares o idénticas situaciones jurídicas, no puede sostenerse válidamente que en tal evento es su voluntad anterior la que manifiesta y no una nueva, puesto que ello significaría desvirtuar la naturaleza del acto legislativo. Por tanto, si el legislador deroga una ley."



DE JUSTICIA
CIÓN
29

- lo cual no necesita hacer cuando estima que la voluntad en ella contenida debe seguir imperando parcialmente-, y expide un nuevo ordenamiento legal en el que regula, de igual manera que en la ley vieja, determinada situación jurídica --nueva expresión de voluntad--, no puede estimarse consentida la nueva ley en razón de haberse consentido la anterior, puesto que, como se dijo, aquella constituye un acto formal y materialmente distinto de ésta."

En consecuencia, al ser fundados los -- agravios y no actualizarse alguna causa de improcedencia que pueda hacerse valer de oficio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 91, fracción III de la Ley de Amparo, procedé revocar la sentencia recurrida y analizar los conceptos de violación no estudiados por el juez de Distrito.

QUINTO.- Es fundado el concepto de violación en el que se argumenta que la Ley de Ingresos Municipales del Estado de Michoacán para el año de -- mil novecientos setenta y ocho, invade, en perjuicio de la quejosa, la esfera de las atribuciones de la autoridad federal, al establecer en su artículo 1 el derecho por consumo de energía eléctrica, porque, en los términos del artículo 73, fracción XXIX de la Constitución federal, corresponde en exclusiva al Congreso de la Unión imponer contribuciones sobre esa materia.





A ese respecto, se transcribe la ley reclamada en lo conducente: "Art. 1... II. DERECHOS...4.- Por servicio de alumbrado publico... ARTICULO 17.- Los consumidores de energía eléctrica, con excepción de los que operen bombas de agua potable y negras, molinos de nixtamal y para usos agrícolas, causarán un derecho del 10% sobre su consumo mensual, el que se destinará al pago y mejoramiento del servicio de alumbrado público.- Las empresas suministradoras harán la retención correspondiente, consignando el cargo en los recibos que expidan por el consumo ordinario, informando de las recaudaciones respectivas."

Por su parte, el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5º, subinciso a) determina:

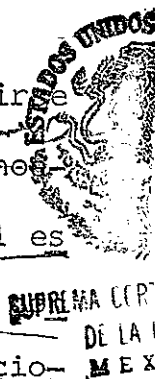
"Art. 73. El Congreso tiene facultad...XXIX. Para establecer contribuciones...5º.- Especiales --- sobre a). Energía eléctrica... Las entidades federativas participarán en el rendimiento de estas contribuciones especiales, en la proporción que la ley secundaria federal determine. Las legislaturas locales fijarán el porcentaje correspondiente a los municipios, en sus ingresos por concepto del impuesto sobre energía eléctrica;"

Como se ve, la reserva expresa de facultades en favor del poder legislativo federal que señala el precepto constitucional transcrito implica, que los Estados no pueden establecer ninguna carga tributaria, cualquiera que sea la denominación que le asignen, en materia de energía eléctrica.

El artículo 17 de la Ley reclamada sí crea un tributo sobre el consumo de energía eléctrica, como se desprende de la lectura del mismo pues su redacción es clara en tal sentido y destina los fondos recaudados a costear el servicio de alumbrado público. Del texto de dicho precepto aparece que el objeto del tributo es el consumo de energía eléctrica; sobre tal consumo de calcular el cobro; no se establece el pago del tributo por el aprovechamiento del alumbrado público, sino por consumir la energía eléctrica, de tal manera que quien no la consume no paga el tributo y el que la consume lo paga en proporción a su consumo.

copiar
X En consecuencia, se establece en la Ley impugnada un tributo sobre el consumo de energía eléctrica, lo que está reservado al Congreso de la Unión conforme al artículo 73 fracción XXIX inciso 5 subinciso a); pues sólo el Congreso Federal puede gravar la energía eléctrica según este precepto; ya sea su producción, distribución, venta o consumo. Los Estados sólo tendrán derecho a la participación que la ley federal determine; y los Municipios, a su vez, sólo tendrán derecho al porcentaje que de esa participación señale la ley local.

→ En las relatadas condiciones, debe concluirse que la Ley ^{núm 78} de ^{de los} Ingresos ^{del} Municipales del Estado de Michoacán ^{Guerrero} para el año de mil novecientos setenta y ocho, al establecer en su artículo 17 una contribución sobre el consumo de energía eléctrica, invade la esfera de atribución





nes de la autoridad federal, violando por consiguiente, en perjuicio de la sociedad quejosa, las garantías individuales contenidas por los artículos 14 y 16 constitucionales, por lo que procede concederle el amparo y protección de la justicia federal que solicita en contra de la referida ley que reclama como autoaplicativa.

Por lo expuesto y fundado además, en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, de la Constitución Federal, 84, fracción I, inciso b) 90 y 91 de la Ley de Amparo, se resuelve:

PRIMERO.- Queda firme el sobreesamiento dictado en el juicio respecto de los actos de aplicación genérica de la Ley reclamada, que se atribuyen a los tesoreros municipales de las ciudades de Morelia y Zacapu, del Estado de Michoacán.

SEGUNDO.- En la materia de la revisión, se revoca la sentencia recurrida.

TERCERO.- La Justicia de la Unión, ampara y protege a la quejosa, S.A., en contra de los actos que reclama del Congreso local, Gobernador y Secretario general de Gobierno del Estado de Michoacán, consistentes en la expedición, promulgación, y refrendo de la Ley de Ingresos Municipales de ese Estado para el año de mil-novecientos setenta y ocho.

Notifíquese.

Así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia -

DE JUSTICIA
CICN
66

de la Nación en Pleno, por unanimidad de dieciséis votos de los señores Ministros: Cuevas Mantecón, Castellanos - Tena, Rivera Silva, Langle Martínez, Lozano Ramírez, Pavón Vasconcelos, Rodríguez Roldán, Inárritu, Gutiérrez - de Velasco, González Martínez, Salmorán de Tamayo, Del - Rio, Calleja García, León Orantes, Olivera Toro y Presidente Rebolledo. Fue Ponente el señor Ministro Raúl -- Cuevas Mantecón. Firman los CC. Presidente Mario G. Rebolledo y Ministro Ponente con el C. Secretario General de Acuerdos que da fe. Ausentes el señor Ministro Julio Sánchez Vargas por comisión oficial; los ministros Alfonso López Aparicio, David Franco Rodríguez y J. Ramón Palacios Vargas previo aviso a la Presidencia.- Doy Fe.-

E L P R E S I D E N T E .

LIC. MARIO G. REBOLLEDO FERNANDEZ.

MINISTRO PONENTE.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.

LIC. RAUL CUEVAS MANTECON.

LIC. MANUEL TORRES BUENO.

16 NOV. 1982

En se para este
asunto al C. Actuario para la notificación del auto
que antecede Conste.

En 23 NOV. 1982 y Por medio de lista, se
notificó la resolución anterior a las partes y al Ministerio Público
Federal. Conste.